

41 años de democracia peruana (1980-2021)

La continua lucha hacia la prosperidad



El retorno a la democracia en el Perú (1980). Fernando Belaunde Terry y Francisco Morales Bermúdez.

Fuente: Nando M. G / Flickr

Jorge Medicina

Profesor de Economía y Empresa
en la Universidad de Lima

La dictadura del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, instaurada por el golpe de Estado del general de división Juan Velasco Alvarado (1968-1975) y continuada por el general Francisco Morales Bermúdez Cerruti (1975-1980), se caracterizó por convivir en un Estado intervencionista resumido en una economía regulada. Es decir, se planificaba la producción y los niveles de gasto con una severa política de control de precios, como el fijar el precio de los salarios, combustibles y otros productos que componen la canasta de bienes de consumo de

las familias; además, se estatizaron empresas extranjeras y se creó gran número de empresas públicas. En julio de 1980, regresó la democracia con la juramentación del segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry (1980-1985) con una nueva Constitución Política, aprobada en la Asamblea Constituyente de 1979. Luego, en 1985, el propio presidente Belaunde entregó la banda presidencial el 28 de julio del mismo año a Alan García Pérez (1985-1990).

En estos diez años del retorno de la democracia, se conservó el Estado intervencionista, pero

con marcados fracasos en materia económica, de seguridad interna, institucional y de la política internacional. En lo económico, la inflación alta, y después la hiperinflación, redujo el poder adquisitivo de los peruanos, que se quedaron sin capacidad de ahorro y sin posibilidad de utilizar el crédito para estimular los negocios o el avance del comercio. Hubo intentos de estatizar la banca privada y una severa política en el control de precios condujo a la aparición de mercados especulativos (mercado negro) por la carestía de bienes; la alta tasa de desempleo aumentó el subempleo del tipo informal por horas o ingresos. El desempleo era estructural (oferta de empleo mayor que la demanda). En cuanto a la seguridad interna, se vio amenazada por el accionar criminal de grupos extremistas o subversivos como el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y el Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso (PCP-SL). La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en su *Informe final* (2003), estima una cifra de 69 280 personas asesinadas o desaparecidas, además de innumerables violaciones a los derechos humanos y daños económicos superiores a los 26 000 millones de dólares. En lo



Alan García, presidente del Perú (1985-1990)
Fuente: Wikimedia Commons



Juan Velasco Alvarado, presidente del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (1968-1975)
Fuente: Wikimedia Commons

institucional, los poderes del Estado empezaron a quebrarse por una notoria intervención del gobierno de turno y, con ello, la aparición de la corrupción política. Finalmente, en la política exterior, las relaciones no eran las mejores con los organismos financieros internacionales, a tal punto que el Perú fue clasificado como un país con alta tasa de riesgo para la captación de capital financiero y las inversiones directas extranjeras. El país se quedó con saldo negativo en reservas internacionales netas. Todo esto produjo el descontento de la población peruana que buscaba un cambio en la dirección política, económica y social.

En 1990, el candidato Alberto Fujimori Fujimori aparece como una alternativa distinta a las estructuras partidarias de la época: prometía cambios en el manejo político con el discurso pluricultural de “honradez, tecnología y trabajo”. Así ganó las elecciones de ese año. En su primer gobierno se impusieron reformas de primera generación que apuntarían a los aspectos económico, institucional, social y político. Para poner en marcha el plan trazado, debía contar con el apoyo de la mayoría en el Congreso de

la República (bicameral en ese entonces), pero no lo tenía. La estabilización macroeconómica era lo primordial, con una política de *shock* a fin de desaparecer la hiperinflación y lograr una desinflación hasta alcanzar un solo dígito. Luego, se debía implementar una serie de medidas económicas de corte liberal sugeridas por los organismos financieros internacionales para que el Perú volviera a tener credibilidad ante los acreedores del capital financiero y los inversionistas directos extranjeros. El 5 de abril de 1992, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, el gobierno de turno decidió dar un autogolpe de Estado “justificando la creación de un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”. Fujimori disolvió el Congreso y otras instituciones del Estado “alegando el bloqueo parlamentario, la ineficiencia del Poder Judicial y la amenaza terrorista”. El 29 de diciembre de 1993, se promulgó la Constitución Política que permitía la reelección presidencial.

Alberto Fujimori permaneció casi once años en el poder, pero en este tiempo fue perdiendo popularidad por los grandes indicios de corrupción política, extorsiones políticas, exceso de



Alberto Fujimori, presidente del Perú (1990-2000)
Fuente: Wikimedia Commons

poder y, con ello, el desgaste gubernamental que traspasaría las fronteras. Logró neutralizar el avance terrorista encarcelando a los principales cabecillas de las cúpulas subversivas e insertó al Perú en el mundo financiero internacional para promover la llegada de capitales, además de mejorar notoriamente la infraestructura básica para la inversión privada. A ello se sumó la estabilidad de precios (incluido el del dólar), la recuperación de la moneda y la liberalización de la economía con mercados más estables, lo que incrementó el poder adquisitivo. Sin embargo, el descontento popular era desbordante por los escándalos de corrupción, las sospechas de tráfico de armas y los sobornos a congresistas o personas con poder político y económico.

Las presiones de la prensa y del descontento popular hicieron que Fujimori renunciara vía fax desde Japón. Entonces, el Congreso peruano nombró como presidente interino a Valentín Paniagua Corazao desde el 22 de noviembre del 2000 hasta el 28 de julio del 2001, cuando asumió la presidencia Alejandro Toledo Manrique (2001-2006). En materia económica, en los cinco años de su gobierno, se aprobaron los tratados de libre comercio y se implementaron varios proyectos de inversión en infraestructura y desarrollo.

Siguió un periodo de sucesión democrática de gobiernos. El 28 de julio del 2006 llega al poder por segunda vez Alan García Pérez, cuya gestión se caracterizó por favorecer la inversión extranjera para tener una mayor presencia e integración del Perú en los grandes mercados internacionales. El 28 de julio del 2011, juramentó Ollanta Humala Tasso. En su gobierno se estableció una serie de propuestas de reformas y políticas públicas con el objetivo de asegurar el desarrollo de la inclusión social y la redistribución en un marco de estabilización política, económica y social. El 28 de julio del 2016, asume la presidencia Pedro Pablo Kuczynski Godard. Durante su corto periodo de gobierno fue muy cuestionado por una serie de desaciertos, como el haber sido partícipe de las negociaciones ilegales con la empresa brasileña Odebrecht cuando fue ministro de



Martín Vizcarra, presidente del Perú (2018-2020)

Fuente: Wikimedia Commons

Economía y presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Alejandro Toledo Manrique; y por haber indultado a Alberto Fujimori encarcelado. En medio de una inestabilidad política con revueltas y marchas en la capital y otras ciudades del interior, decidió renunciar a la presidencia.

El 23 de marzo del 2018, el primer vicepresidente, Martín Vizcarra Cornejo, asumió el mandato presidencial en la sede del Congreso de la República y lo desempeñó hasta el 10 de noviembre del 2020, cuando el propio Congreso declaró su permanente incapacidad moral por estar vinculado con la red de corrupción del llamado Club de la Construcción, presunta concertación ilícita de constructoras para repartir obras adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Fue un gobierno con indicios de corrupción y muy cuestionado por la gestión de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, pues ocultó información del número de fallecidos (superior a los 47 000). A ello se añadió el mal manejo en

el aspecto económico que llevó a un descenso del PBI real en un 17,4 % durante el primer semestre del 2020.

Ante la vacancia presidencial, el 10 de noviembre del 2020, el presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, juramentó como presidente del Perú, pero a los pocos días renunció por incapacidad moral, y el 17 de noviembre de ese año asume como presidente de transición el congresista Francisco Sagasti Hochhausler. En su corto periodo le corresponde continuar con el proceso de las coordinaciones con los gobiernos locales para luchar contra la pandemia y concretar la compra de lotes de vacunas. Será el presidente que entregará la banda presidencial a quien proclamen como presidente del Perú en el bicentenario.

En resumen, desde el año de 1980 a la fecha (2021), el Perú ha tenido tres cartas magnas (1933, 1979 y 1993). Dos modelos económicos: el de un Estado intervencionista desde 1980 hasta 1993 y otro del tipo de una economía social de mercado de 1993 a la fecha, 2021. En los 41 años de democracia no se ha podido concretar las reformas del Estado para evitar el avance de la corrupción y de la informalidad, dando cabida al accionar del mercantilismo y no a un capitalismo moderno dentro del Estado de derecho que toda nación anhela. A pesar de que la tasa de pobreza monetaria se redujo del 42,4 % a un 20,5 % entre el 2007 y el 2018, se obtuvo un crecimiento del PBI real promedio del 4,5 % entre el 2010 y el 2019, una tasa promedio de inflación meta del 2,4 % y, en igual periodo, un *stock* en reservas internacionales netas superior a los 78 000 millones de dólares, al parecer no ha sido suficiente para cubrir las demandas sociales, con marcadas brechas de desigualdad entre lo urbano y lo rural, entre lo formal y lo informal. Esta situación ha desencadenado una polarización de la “mitad + 1” de un electorado que pediría un cambio de sistema no solo de gobierno, sino también político, social y económico en las últimas elecciones presidenciales de la segunda vuelta electoral.